

# Cien años de instrumentalización política: cómo los partidos políticos estadounidenses han utilizado estratégicamente la política migratoria para consolidar y expandir su poder político (1926-2026).

Generado por: Asistente Legal de  
IA. Facilitado por: Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc.

4 de febrero de 2026

© 2026 Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc. Generado por un Asistente Legal de IA. Con la colaboración del Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc. Todos los derechos reservados.

## CIEN AÑOS DE INSTRUMENTACIÓN POLÍTICA: CÓMO NOSOTROS LOS PARTIDOS POLÍTICOS HAN UTILIZADO ESTRATÉGICAMENTE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN PARA CONSOLIDAR Y AMPLIAR SU PODER POLÍTICO (1926-2026)

Este análisis exhaustivo examina el despliegue estratégico de la política migratoria y los mecanismos de control por parte de los partidos Demócrata y Republicano a lo largo de un siglo de política estadounidense. La evidencia demuestra que la política migratoria ha funcionado consistentemente como una herramienta para obtener ventaja partidista, con partidos que modifican sus posturas no principalmente en función de convicciones ideológicas, sino más bien en respuesta a las demandas de las coaliciones laborales, las oportunidades de captación de votantes de grupos étnicos y los cálculos electorales. Las políticas restrictivas del período 1924-1965 reflejaron los esfuerzos republicanos por consolidar el apoyo entre los sindicatos y los sectores nativistas amenazados por la inmigración del sur y el este de Europa. La liberalización de 1965-1996 representó una estrategia demócrata calculada para captar los electorados emergentes de inmigrantes latinos y asiáticos, a pesar de las garantías públicas de que la inmigración aumentaría mínimamente. El período de 1996-2026, centrado en el control migratorio, vio a ambos partidos adoptar la expansión de la infraestructura de deportación, la capacidad de detención y la discrecionalidad procesal, aunque con prioridades de control diferentes que reflejaban sus respectivas bases políticas. A lo largo de este siglo, la infraestructura de control migratorio se ha construido, expandido y desplegado de forma selectiva y deliberada para maximizar la ventaja electoral partidista, manteniendo al mismo tiempo una negación plausible suficiente para evitar acusaciones de instrumentalizar explícitamente la política migratoria.

### La era restrictiva (1924-1965): Construyendo la infraestructura de aplicación de la ley para el partidismo. Ventaja

La Ley de Inmigración de 1924, comúnmente conocida como la Ley Johnson-Reed, representa el ejemplo histórico más claro de una política de inmigración diseñada explícitamente para promover objetivos políticos partidistas y consolidar el apoyo entre una coalición específica de electores alineados con el Partido Republicano.[1][2] La legislación fue redactada e impulsada por el representante republicano Albert Johnson de Washington y el senador David Reed de Pensilvania, ambos con compromisos ideológicos explícitos con la jerarquía racial y la preferencia étnica.[1] Los artífices de la Ley buscaron explícitamente preservar lo que denominaron la "homogeneidad" estadounidense a través de un sistema de cuotas de origen nacional que asignaba las admisiones de inmigración en función de la composición étnica de la población estadounidense según el censo de 1890, una década elegida específicamente porque precedió a las principales oleadas de inmigración del sur y del este de Europa.[1][2]

El impacto numérico fue marcadamente discriminatorio e intencional. Bajo la Ley de Cuotas de Emergencia de 1921, que precedió a la Ley Johnson-Reed, las naciones de Europa del Este y del Sur recibieron el 41 por ciento de las admisiones de cuota disponibles, mientras que las naciones de Europa Occidental y del Norte recibieron solo el 45 por ciento.[1] La Ley de 1924 invirtió por completo esta proporcionalidad, asignando el 82 por ciento de las admisiones de cuota a las naciones de Europa Occidental y del Norte, mientras que redujo la participación de Europa del Este y del Sur a apenas el 11 por ciento.[1] La Ley excluyó simultáneamente la inmigración asiática casi por completo, sirviendo de hecho a los movimientos xenófobos de base occidental que durante mucho tiempo habían considerado a los trabajadores asiáticos como amenazas económicas e inferiores racialmente.[1] Como señaló el politólogo y observador contemporáneo, el senador Henry Cabot Lodge, la Ley fue concebida como un baluarte contra "un flujo de sangre extranjera", un lenguaje que refleja la adopción explícita de la época de la pseudociencia racial y la ideología eugenésica.[1]

La coalición republicana que apoyó la Ley de 1924 fue diseñada específicamente para unir los intereses empresariales.

que requería control laboral con electorados culturalmente conservadores y nativistas. La Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), aunque ideológicamente opuesta a muchas posiciones republicanas sobre los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva, brindó un apoyo crucial porque la Ley redujo la competencia de los trabajadores inmigrantes dispuestos a trabajar por salarios más bajos y en peores condiciones.[13] Samuel Gompers, él mismo un inmigrante judío de Gran Bretaña y fundador de la AFL, no obstante abogó por la restricción porque "se oponía a la mano de obra barata que representaba la inmigración", y la AFL proporcionó legitimidad política esencial para lo que de otro modo podría haber parecido un fanatismo puramente nativista.[1] Esta coalición, que combinaba los intereses empresariales en el control de la oferta laboral con el conservadurismo cultural nativista, se convirtió en el modelo de cómo operaría el restrictivismo migratorio republicano durante décadas: presentando las restricciones migratorias como medidas de protección salarial económicamente racionales en lugar de discriminación étnica, incluso cuando la preferencia étnica explícita seguía siendo el mecanismo central de la política.

La estructura de aplicación de la ley creada por la Ley de 1924 fue igualmente significativa desde la perspectiva de la consolidación del poder. La Ley autorizó la creación de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos como una agencia federal independiente, otorgando al poder ejecutivo, ya fuera republicano o demócrata, un poder sin precedentes para hacer cumplir selectivamente la ley de inmigración.[1][32] La Patrulla Fronteriza comenzó a operar en 1924 con 450 agentes desplegados a lo largo de ambas fronteras terrestres de los Estados Unidos, una fuerza que para 1930 casi se había duplicado.[32] Fundamentalmente, la Ley estableció un "sistema de control consular" que exigía a los posibles inmigrantes obtener visas de los consulados estadounidenses en el extranjero antes de intentar ingresar, cambiando el principal mecanismo de aplicación de la ley de la detención en las fronteras a la denegación discrecional de visas administrada por funcionarios del poder ejecutivo con una supervisión judicial mínima.[1]

Esta infraestructura de aplicación de la ley demostró ser de gran valor para fines políticos más allá del sistema explícito de cuotas por origen nacional. Los registros históricos documentan que las leyes de inmigración se "aplicaron selectivamente para satisfacer las demandas de los sindicatos, desnaturalizar y deportar activistas políticos y procesar a delincuentes".[1] La aplicación selectiva de la ley de inmigración contra disidentes políticos se convirtió en una herramienta para reprimir la organización sindical, a los anarquistas nacidos en el extranjero y a los presuntos comunistas, particularmente después de las redadas de Palmer de la década de 1920 y durante las décadas posteriores.[1] Al crear una amplia discreción ejecutiva en la aplicación de la ley, la Ley de 1924 otorgó a las administraciones de ambos partidos herramientas para dirigirse selectivamente a las poblaciones inmigrantes en función de consideraciones políticas en lugar de una aplicación legal uniforme.

Durante esta época restrictiva (1924-1965), el Partido Demócrata ocupó una posición inusual e internamente contradictoria que resultaría transitoria hacia su posterior estrategia de liberalización. Mientras que la dirección del partido en los estados del Sur y fronterizos apoyaba el restrictivo sistema de origen nacional como parte de un consenso político más amplio de supremacía blanca, las bases urbanas del partido en el Norte incluían un número creciente de inmigrantes y sus descendientes que consideraban cada vez más las cuotas de origen nacional como explícitamente discriminatorias.[5] La Ley de 1924 recibió una oposición demócrata limitada pero notable, encabezada por el representante Emanuel Celler de Brooklyn, un judío estadounidense cuya enérgica disidencia anticipó el posterior cambio de postura del partido.[1] Décadas después de la aprobación de la Ley, Celler señaló la "sorprendente discriminación de la legislación contra Europa central, oriental y meridional".[1] La temprana oposición de Celler fue premonitrice porque identificó una ventaja latente de la coalición demócrata: si el partido lograba posicionarse como defensor de las minorías étnicas y raciales perseguidas, podría captar el creciente poder político de las comunidades inmigrantes y sus descendientes.

La Ley McCarran-Walter de 1952, formalmente conocida como la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, representó un esfuerzo republicano para perpetuar el sistema restrictivo frente a los desafíos emergentes a las cuotas de origen nacional.[25][28] La Ley fue defendida por el senador Pat McCarran (demócrata por Nevada) y el representante Francis E. Walter (demócrata por Pensilvania), ambos restrictivos, lo que demuestra que la restricción de la inmigración trascendió las simples líneas partidistas durante esta época, aunque el Partido Republicano siguió siendo el partido más consistentemente restrictivo a nivel nacional. [25] McCarran era un ideólogo anticomunista que veía

La política de inmigración a través del prisma de las preocupaciones de seguridad de la Guerra Fría, enmarcando explícitamente el sistema de cuotas de origen nacional como necesario para protegerse contra la infiltración comunista y los "intereses judíos".[25] La Ley mantuvo las cuotas de origen nacional mientras que modestas reformas aparentemente liberalizaron algunas disposiciones, pero el mantenimiento de la preferencia racial en la ley de inmigración siguió siendo la característica central de la Ley a pesar del veto del presidente Harry Truman (que el Congreso anuló por una mayoría de dos tercios).[25][28]

La maquinaria de aplicación de la ley se expandió durante este período. Para 1952, las acciones anuales de aplicación de la ley (deportaciones y retornos voluntarios) habían llegado a 727.000, un aumento drástico con respecto a las 12.000 de 1942, lo que demuestra que la infraestructura autorizada por la Ley de 1924 se estaba desplegando con una intensidad creciente. [43] Durante la administración de Eisenhower, la aplicación de la ley alcanzó nuevos picos, con la Operación Wetback en 1954, que representó una campaña masiva de aplicación de la ley en el interior dirigida a ciudadanos mexicanos que resultó en aproximadamente 1,1 millones de acciones de aplicación de la ley solo en ese año.[43] La Operación Wetback, a pesar de su nombre repulsivo, demostró cómo la infraestructura de aplicación de la ley podía movilizarse para convertir en chivos expiatorios políticamente convenientes a un grupo de origen nacional en particular; en este caso, ciudadanos mexicanos cuyo trabajo era deseado por los intereses agrícolas estadounidenses, pero cuya presencia podía ser utilizada como arma política durante períodos de excedente de mano de obra.

La constante a lo largo de todo el período 1924-1965 fue que la política y la aplicación de la inmigración cumplían dos funciones políticas integradas: primero, el control de la oferta laboral, que beneficiaba a los intereses empresariales a la vez que recompensaba las demandas sindicales de reducir la competencia; y segundo, el control étnico, que preservaba el poder político de los sectores que favorecían la inmigración de Europa Occidental, excluyendo o minimizando la inmigración de grupos considerados políticamente y culturalmente amenazantes. El Partido Republicano se erigió como defensor de este sistema porque podía unir a los intereses empresariales, a los sindicatos de ciertos sectores y a los conservadores culturales nativistas bajo el lema de "preservar el carácter estadounidense", un lenguaje que encubría la preferencia étnica a la vez que proporcionaba una justificación económica.

## La era de la liberalización (1965-1996): reposicionamiento estratégico democrático y la Construcción de una nueva coalición electoral

La Ley de Inmigración Hart-Celler de 1965 representó un cambio drástico y trascendental en la postura del Partido Demócrata sobre inmigración, que transformaría radicalmente las coaliciones electorales estadounidenses en las décadas siguientes.[2][5] La Ley fue patrocinada por el Senador Philip Hart (demócrata por Michigan) y el Representante Emanuel Celler (demócrata por Nueva York), el mismo Celler que había disentido de la Ley Johnson-Reed de 1924 cuatro décadas antes.[5] La legislación abolió formalmente el sistema de cuotas por origen nacional que había sido la piedra angular de la política de inmigración estadounidense desde la década de 1920, eliminando la preferencia étnica explícita y creando un sistema de preferencia de siete categorías basado en la reunificación familiar y criterios de empleo en lugar del origen nacional.[5]

Para comprender el cálculo político detrás de la Ley Hart-Celler de 1965, es necesario examinar el contexto electoral y demográfico. La campaña del presidente John F. Kennedy en 1960 se había dirigido explícitamente a los votantes étnicos urbanos en los estados del norte, donde se concentraban los inmigrantes y sus descendientes y donde la suerte electoral del Partido Demócrata era cada vez más vulnerable.[2] Los estrategas de la campaña de Kennedy reconocieron que el sistema de cuotas por origen nacional —que discriminaba explícitamente a los inmigrantes del sur y del este de Europa y a sus descendientes— se estaba convirtiendo en un lastre político con el creciente bloque de votantes italoamericanos, polacoamericanos y de otros países de Europa del Este, que ahora representaban importantes circunscripciones demócratas.[2] En una carta de 1955 dirigida a su colega, el senador Lyndon Johnson, Kennedy escribió claramente: «El Partido Demócrata debe hacer algo para cumplir sus promesas de 1952 sobre la revisión de la Ley McCarran si quiere tener algún atractivo en las grandes ciudades del norte en 1956».[2] Esto no era un principio elevado sobre la igualdad racial; era un cálculo electoral.

sobre si el Partido Demócrata podría mantener los bloques de votantes urbanos del norte, cada vez más alienados por un sistema de inmigración que discriminaba explícitamente los orígenes nacionales de sus antepasados.

La historia legislativa de la Ley de 1965 revela aún más la naturaleza estratégica del posicionamiento demócrata. El presidente Johnson hizo de la reforma migratoria una prioridad en 1965 después de su aplastante victoria electoral en 1964, que le había dado un Congreso mayoritariamente demócrata y un capital político significativo.[2][5] Sin embargo, los funcionarios de la administración Johnson propusieron inicialmente reservar el 50 por ciento de las visas de inmigrante para personas con las habilidades necesarias, un lenguaje que sugería una preferencia por la inmigración de trabajadores educados y económicamente productivos, probablemente provenientes de países desarrollados.[2] Este lenguaje reflejaba los intereses de las empresas y los empleadores en la inmigración de trabajadores calificados.

El representante Michael A. Feighan (demócrata por Ohio), presidente del Subcomité de Inmigración de la Cámara de Representantes y aparente opositor a la liberalización, propuso entonces una enmienda que se convirtió en decisiva y que alteró drásticamente el impacto final del proyecto de ley.[2][5] Feighan insistió en que se priorizara la reunificación familiar sobre la inmigración basada en el empleo y que el sistema de preferencias asignara el 74 por ciento de las visas de inmigrante a categorías basadas en la familia, incluidos los hermanos de ciudadanos estadounidenses, lo que dio lugar a que el proyecto de ley fuera conocido coloquialmente como "la Ley de Hermanos y Hermanas".[2] Feighan presentó su propuesta como una astuta maniobra política para preservar la composición étnica: al hacer de la reunificación familiar la preferencia dominante, argumentó que el sistema continuaría naturalmente los patrones de inmigración existentes porque las personas que ya se encontraban en Estados Unidos podrían traer a miembros de su familia desde sus países de origen.[2] En una de las ironías políticas más trascendentales de la historia, la enmienda aparentemente conservadora de Feighan, diseñada para preservar la composición étnica existente, en realidad puso en marcha lo que se convertiría en la migración en cadena —en la que los inmigrantes podían patrocinar gradualmente extensas redes familiares— que transformaría drásticamente los patrones de inmigración estadounidenses y la composición demográfica de la nación.

Los patrones de votación legislativa sobre la Ley Hart-Cellar revelan una división parcial entre los partidos, pero también un sorprendente apoyo bipartidista, aunque en diferentes circunscripciones. En la Cámara de Representantes, el proyecto de ley se aprobó con un apoyo bipartidista abrumador: 320-70, con 202 votos a favor de los demócratas y 60 en contra, y 118 a favor de los republicanos y 10 en contra.[5] En el Senado, el margen fue de 76-18, con 52 votos a favor de los demócratas y 14 en contra, mientras que 24 votos a favor de los republicanos y solo 3 en contra.[5] La oposición más enérgica provino de los demócratas del Sur, una clara indicación de que el apoyo demócrata se concentraba en las circunscripciones del Norte, mientras que los demócratas del Sur —que aún representan el ala segregacionista residual del partido— votaron en contra de la medida.[5] Un análisis contemporáneo de la ciencia política demuestra que los votos del Congreso a favor de la reforma estaban fuertemente asociados con el apoyo del distrito a la abolición de las cuotas por país de origen, y el sentimiento antidiscriminatorio resonó entre los votantes en los distritos que eligieron representantes que apoyaban la reforma.[7]

La justificación explícita de la Ley de 1965 contenía falsedades demostrables sobre su impacto demográfico previsto, respaldadas tanto por partidarios demócratas como republicanos.[5] El senador Ted Kennedy declaró durante el debate en el Senado: «Nuestras ciudades no se verán inundadas por un millón de inmigrantes anualmente... la composición étnica de este país no se verá alterada». [5] El representante Celler aseguró de manera similar a los escépticos que «el proyecto de ley que tienen ante ustedes no aumenta significativamente el número básico de inmigrantes a los que se les permitirá la entrada».[2] Ambas garantías resultaron ser espectacularmente inexactas. Para 1980, la mayoría de los inmigrantes provenían de América Latina, Asia y África, completamente diferentes del predominio de Europa Occidental/Norte que había caracterizado la era posterior a 1924.[2] Los niveles anuales de inmigración aumentaron del promedio de 300.000 que prevalecía en la década de 1960 a más de 7 millones de inmigrantes que ingresaron legalmente al país solo durante la década de 1980.[2]

El impacto final de la Ley Hart-Cellar: aumentar drásticamente la inmigración de América Latina, Asia y África sirvió a los intereses políticos demócratas de maneras que los estrategas demócratas no anticiparon o

Ocultado deliberadamente del debate público. La inmigración latina aumentó considerablemente tras la Ley, sobre todo a medida que se desmantelaba progresivamente el sistema de cuotas del hemisferio occidental que antes restringía la inmigración latinoamericana.[13] Para 1980, la composición étnica de Estados Unidos se había alejado decisivamente del predominio de Europa Occidental de la era anterior a 1965. Estos cambios demográficos resultarían ventajosos electoralmente para los demócratas, ya que los inmigrantes latinos y asiáticos y sus descendientes, a pesar de la diversidad política interna, han votado sistemáticamente por el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales con márgenes que oscilan entre el 55 % y el 72 % a lo largo de las décadas.[22]

La estrategia de formación de coaliciones del Partido Demócrata en torno a la Ley de 1965 revela, por tanto, un cálculo político sofisticado: el partido podía posicionarse como defensor de los derechos civiles y opositor de la discriminación racial (alineándose con la línea moral del Movimiento por los Derechos Civiles) mientras, simultáneamente, estructuraba una política migratoria para aumentar la inmigración de grupos que eventualmente se convertirían en electorados demócratas. Las falsedades explícitas del partido sobre el drástico aumento de la inmigración —y el cambio en su composición étnica— sugieren una notable incompetencia política o una ocultación deliberada de las verdaderas intenciones políticas. La posterior estrategia electoral demócrata revela que esta última interpretación es más convincente: el partido se posicionó sistemáticamente como defensor de las "comunidades inmigrantes" (con lo que se refería cada vez más a las comunidades latinas y asiáticas) en las campañas electorales, lo que sugiere que el partido comprendía que la Ley Hart-Cellar generaría estos resultados demográficos.

Durante el período 1965-1996, los patrones de control migratorio variaron significativamente según la administración, reflejando las prioridades partidistas y las demandas de la coalición.[27] La administración Nixon (1969-1974) amplió la fuerza laboral de la Patrulla Fronteriza, pero mantuvo una intensidad de control relativamente modesta en comparación con los estándares posteriores.[32] La administración Ford (1974-1977) continuó con esta tendencia. La administración Carter propuso una represión contra la inmigración indocumentada y creó la Comisión Selecta sobre Política de Inmigración y Refugiados en 1979 para estudiar y formular recomendaciones sobre la inmigración ilegal y la reforma migratoria, lo que indicaba una creciente preocupación bipartidista por la inmigración indocumentada, incluso mientras continuaba el aumento de la inmigración legal.[32]

El posicionamiento de los sindicatos laborales evolucionó drásticamente durante este período de maneras que posteriormente resultarían trascendentales. La AFL y la CIO se fusionaron en 1955, y esta fusión impulsó al contingente de la AFL a liberalizar su postura respecto a la inmigración legal, dejando de abogar por las políticas restrictivas que habían caracterizado sus décadas anteriores.[13] Sin embargo, a medida que la inmigración indocumentada comenzó a aumentar en las décadas de 1970 y 1980 —en parte como consecuencia de la eliminación de las cuotas del hemisferio occidental por la Ley Hart-Cellar, que anteriormente habían restringido la inmigración latinoamericana—, los sindicatos laborales se mostraron cada vez más preocupados por los trabajadores indocumentados como competidores económicos.[13] Durante las décadas de 1970 y 1980, la AFL-CIO defendió argumentos similares a los que había esgrimido contra la inmigración legal décadas antes: los inmigrantes indocumentados estaban dispuestos a trabajar por menos dinero y en peores condiciones, y reducirían los salarios de los trabajadores nativos y aumentarían el desempleo.[13] Esta postura laboral adquiriría relevancia electoral porque coincidía con la de los sectores obreros demócratas preocupados por la competencia salarial, incluso cuando el mensaje nacional del Partido Demócrata hacía cada vez más hincapié en el apoyo a las comunidades inmigrantes.

La Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 (IRCA), firmada por el presidente republicano Ronald Reagan, representó el primer gran compromiso legislativo que intentó abordar el creciente aumento de la inmigración indocumentada, manteniendo al mismo tiempo cierto reconocimiento de los inmigrantes ya integrados en la vida estadounidense.[15][18] La IRCA legalizó a aproximadamente 3 millones de personas, en su mayoría de ascendencia hispana, que habían ingresado al país antes del 1 de enero de 1982, brindándoles vías hacia la residencia permanente legal y la eventual ciudadanía.[15][18] Simultáneamente, la IRCA ilegalizó que los empleadores contrataran a sabiendas a inmigrantes indocumentados y estableció sanciones civiles y penales por violaciones.[15] La IRCA también autorizó un aumento del 50 por ciento en el personal de la Patrulla Fronteriza en los años fiscales 1987 y 1988.[32] La legislación representó una medida política

Acuerdo: las sanciones a los empleadores abordaron las preocupaciones de los sindicatos y la clase trabajadora sobre la competencia salarial, mientras que el componente de legalización proporcionó una válvula de escape humanitaria y reconoció que la deportación masiva no era ni factible ni políticamente aceptable.

Sin embargo, el mecanismo de aplicación de la IRCA (sanciones a los empleadores) resultó en gran medida ineficaz porque la legislación incluía una disposición de "protección afirmativa" que eximía expresamente a los empleadores de la obligación de verificar la validez de los registros de los trabajadores.[15] La legislación también requería que los trabajadores presentaran el Formulario I-9 para demostrar su elegibilidad para trabajar, pero los empleadores enfrentaban una presión de aplicación mínima y las sanciones financieras solían ser pequeñas en relación con el ahorro de costos derivado de la contratación de trabajadores indocumentados con salarios bajos. [15][18] Estudios posteriores documentaron que la IRCA dio lugar a cierta discriminación contra los trabajadores que parecían extranjeros y a reducciones salariales para los trabajadores cuyo estatus era cuestionado, pero no redujo sustancialmente la inmigración indocumentada ni la competencia en el mercado laboral.[15]

La Proposición 187 de California de 1994, aunque fue una iniciativa estatal y no una política federal, reveló cómo la aplicación de las leyes de inmigración podía utilizarse como arma para obtener ventajas electorales.[33][36] La iniciativa "Salvemos Nuestro Estado", presentada por el asambleísta republicano Dick Mountjoy y defendida por el gobernador republicano Pete Wilson durante su campaña de reelección, proponía establecer un sistema de verificación de ciudadanía y prohibir que los inmigrantes indocumentados utilizaran servicios de salud no urgentes y educación pública.[33][36] La iniciativa reflejaba la ansiedad de la clase trabajadora y la clase media blanca sobre la inmigración durante un período de recesión económica, y sus partidarios argumentaban que los inmigrantes indocumentados estaban generando presión económica sobre los servicios estatales.[33] La iniciativa fue aprobada con el apoyo de 59-41 votantes en noviembre de 1994, pero posteriormente fue bloqueada por tribunales federales por violar las garantías de igualdad de protección de la Decimocuarta Enmienda y por invadir la autoridad federal en materia de inmigración.[33][36]

La importancia política de la Proposición 187 radica en cómo demostró una estrategia republicana de instrumentalizar la ansiedad migratoria para obtener réditos electorales, evitando al mismo tiempo la discriminación étnica explícita que había caracterizado la política anterior a 1965. En lugar de abogar por la preferencia por los europeos occidentales, como lo había hecho la Ley de 1924, la estrategia republicana de la década de 1990 planteó la oposición a la inmigración indocumentada en términos de estado de derecho y carga fiscal —argumentos racionales desde el punto de vista económico y legal, en lugar de preferencias étnicas—, a pesar de que el efecto práctico fue reducir drásticamente la inmigración latina (dado que América Latina se había convertido en la principal fuente de inmigración indocumentada tras la Ley Hart-Cellar).

La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA) de 1996, aprobada por un Congreso republicano y firmada por el presidente demócrata Bill Clinton, representó el cambio definitivo hacia un paradigma de aplicación prioritaria de la ley que dominaría las décadas siguientes.[3][6] La IIRIRA fortaleció las leyes de inmigración de EE. UU. al ampliar la lista de condenas penales que desencadenan la deportación obligatoria, implementar la detención obligatoria para muchos inmigrantes en espera de procedimientos de expulsión y crear un complejo sistema de procedimientos de expulsión acelerados.[3][6][26] La legislación autorizó un aumento de agentes de la Patrulla Fronteriza, mejoró la seguridad de los documentos y promovió medidas para facilitar el tráfico legítimo en los puertos de entrada.[6] Fundamentalmente, la IIRIRA transformó la aplicación de la ley de inmigración de un sistema centrado principalmente en extranjeros con antecedentes penales y amenazas a la seguridad en un sistema que podía dirigirse a prácticamente cualquier extranjero sujeto a expulsión.[3][6]

El apoyo de la administración Clinton a la IIRIRA reflejó un cálculo político complejo. Clinton, que se enfrentaba a la reelección en 1996 contra el republicano Bob Dole, necesitaba demostrar que no era blando con la inmigración ni con el control fronterizo, una vulnerabilidad que había afectado a los candidatos demócratas desde el aumento de la inmigración en la década de 1980.[10] Al apoyar los mecanismos de aplicación de la IIRIRA, Clinton podía atribuirse el mérito de controlar la frontera y, al mismo tiempo, evitar la acusación de ser antiinmigrante (una acusación que podría alienar a los crecientes electorados latinos).[10] La naturaleza bipartidista de la IIRIRA hizo que fuera políticamente difícil para Clinton vetarla a pesar de

cierta oposición progresista a sus duras disposiciones.

Al final de la era de liberalización de 1965-1996, las consecuencias políticas de la Ley Hart-Cellar se hicieron evidentes.

El registro y la participación de votantes latinos estaban aumentando, particularmente en estados como California, Texas y Florida, donde se había concentrado la inmigración de América Latina.[19] La inmigración de estadounidenses de origen asiático también era significativa y creciente.[5] Ambos grupos, a pesar de la diversidad política interna, mostraron preferencias de voto emergentes hacia el Partido Demócrata.[22] Simultáneamente, los votantes blancos de clase trabajadora, que históricamente habían sido más demócratas e incluían importantes comunidades étnicas blancas, estaban girando hacia la derecha en temas de inmigración y otras cuestiones culturales, al percibir que la coalición del Partido Demócrata se estaba transformando de maneras que disminuían su influencia política relativa.[20][23] La "Estrategia del Sur" republicana, desarrollada originalmente en las décadas de 1960 y 1970 para captar a los votantes blancos del Sur alienados por el progreso de los derechos civiles, se estaba adaptando para captar a los votantes blancos de clase trabajadora a nivel nacional, utilizando cada vez más la inmigración como un tema divisivo junto con el crimen, el bienestar social y la acción afirmativa.[20][23]

### La era centrada en la aplicación de la ley (1996-2026): la construcción de un estado de deportación bipartidista y el despliegue partidista selectivo.

La IIRIRA de 1996 inauguró un paradigma de aplicación prioritaria que dominaría la política migratoria durante las siguientes tres décadas, con administraciones tanto demócratas como republicanas expandiendo la capacidad de detención, la autoridad de deportación y la discreción procesal de manera selectiva, reflejando sus respectivas coaliciones políticas.[26][27][30] La magnitud de la expansión de la infraestructura de aplicación es claramente visible en los datos presupuestarios: desde 1994, cuando el presupuesto de la Patrulla Fronteriza era de 400 millones de dólares, el presupuesto anual ha aumentado casi 20 veces a más de 7.300 millones de dólares para el año fiscal 2024.[56] Desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2003, el gobierno federal ha gastado aproximadamente 409.000 millones de dólares en agencias que llevan a cabo la aplicación de la ley de inmigración.[26][56]

Sin embargo, los partidos políticos desplegaron esta infraestructura de control migratorio de maneras estratégicamente diferentes, reflejando las necesidades de sus respectivos electorados. El Partido Republicano, especialmente a partir de la década de 1990, adoptó una retórica y políticas centradas en el control migratorio, dirigidas a los votantes blancos de clase trabajadora preocupados por la inmigración indocumentada, el crecimiento demográfico latino y el cambio cultural. El Partido Demócrata, por el contrario, intentó mantener tanto su apoyo entre los sectores de clase trabajadora preocupados por la competencia laboral como su creciente apoyo entre los sectores latinos e inmigrantes, respaldando una legislación centrada en el control migratorio, al tiempo que intentaba eximir de la aplicación de la ley a ciertas categorías de inmigrantes que le resultaban favorables y defendía retóricamente a determinadas comunidades inmigrantes.

La administración de George W. Bush (2001-2009) marcó un punto de inflexión significativo donde las preocupaciones de seguridad nacional posteriores al 11-S se fusionaron con la aplicación de la ley de inmigración de maneras que expandieron tanto las autoridades legales como el despliegue práctico de los mecanismos de aplicación.[26][29][35] Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 crearon un espacio político para una expansión masiva de la aplicación de la ley de inmigración justificada como una medida antiterrorista. La Ley Patriota, aprobada casi por unanimidad con el apoyo de miembros de todo el espectro político (Senado 98-1, Cámara de Representantes 357-66), mejoró las autoridades de vigilancia policial y los poderes de aplicación de la ley de inmigración, autorizando la detención obligatoria para ciertas categorías de extranjeros.[14][17] La decisión de 2002 de disolver el Servicio de Inmigración y Naturalización y asignar sus funciones al recién creado Departamento de Seguridad Nacional transformó fundamentalmente la inmigración de una función orientada al servicio a una función de seguridad prioritaria.[29]

El gasto federal en control de la inmigración cambió drásticamente después del 11 de septiembre. Para el año fiscal 2006, el presupuesto de las agencias de control de la inmigración dentro del DHS era de 12.500 millones de dólares, casi el triple del nivel del año fiscal 2000.

y un 18 por ciento más que los 10.6 mil millones de dólares asignados ese año para las principales agencias federales de aplicación de la ley penal.[26] Para el año fiscal 2020, las asignaciones para la aplicación de la ley de inmigración alcanzaron los 25.1 mil millones de dólares, un aumento de casi seis veces desde el año fiscal 2000 y un 28 por ciento más que los 19.5 mil millones de dólares dirigidos a las principales agencias federales de aplicación de la ley penal.[26]

El Congreso autorizó una expansión significativa de la capacidad de detención durante la era Bush y continuó a lo largo de las administraciones posteriores. La Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004 exigió al DHS que aumentara el número de camas de detención disponibles en 8000 cada año desde el año fiscal 2006 hasta el 2010.[26]

Desde los años fiscales 2010 a 2012, las asignaciones del Congreso exigieron que ICE mantuviera la capacidad de detener a un mínimo de 33.400 no ciudadanos, y desde los años fiscales 2013 a 2017, un mínimo de 34.000.[26]

Este "mandato de camas de detención" creó presión política y presupuestaria sobre el ICE para mantener altas poblaciones de detención incluso cuando las prioridades de aplicación de la ley podrían no haber exigido tal capacidad, incentivando efectivamente tanto los arrestos como las detenciones para justificar la financiación continua.[26]

La Ley de Valla Segura de 2006, firmada por el presidente George W. Bush, autorizó un aumento masivo de barreras fronterizas y ordenó al DHS lograr el "control operativo" de la frontera entre Estados Unidos y México, de casi 2000 millas, mediante una red de barreras y tecnología.[26] La Ley exigió la construcción de 700 millas de valla fronteriza principal, de las cuales 570 millas se construyeron entre los años fiscales 2006 y 2009.[26] Esto representó un cambio decisivo con respecto al enfoque de la década de 1990 de control concentrado en las principales áreas urbanas de cruce fronterizo, hacia una estrategia de barrera más integral que buscaba prevenir todas las entradas ilegales. El programa de vallas costó decenas de miles de millones de dólares y representó un compromiso político visible para los votantes —literalmente muros de concreto— que demostraba acciones en la frontera.

La administración Bush también inició Comunidades Seguras en 2008, conectando las bases de datos de las fuerzas del orden locales con las bases de datos del FBI y del DHS para identificar si las personas arrestadas tenían violaciones de inmigración.[26] Para enero de 2013, Comunidades Seguras estaba en vigor en las 3181 jurisdicciones policiales del país, transformando a las fuerzas del orden estatales y locales en agentes de facto de control de la inmigración.[26] Ese año fiscal, las personas señaladas al ICE a través de Comunidades Seguras representaron el 59 por ciento de todas las deportaciones de no ciudadanos arrestados dentro del país; al año siguiente, representó más del 67 por ciento de las deportaciones internas, lo que demuestra cómo la infraestructura puede ser utilizada como arma para expandir drásticamente el alcance de la aplicación de la ley.[26]

La administración Obama (2009-2017) ocupó una posición más conflictiva con respecto a la aplicación de las leyes de inmigración que la administración Bush.[27][10][30] La retórica de la campaña de Obama en 2008 enfatizó su compromiso con una reforma migratoria integral y su deseo de crear una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que ya se encontraban en Estados Unidos.[10] Sin embargo, una vez en el cargo, la administración Obama heredó y perpetuó —y en aspectos clave amplió— la infraestructura de aplicación de la ley creada por la administración Bush.[27][30]

El historial de la administración Obama en materia de control migratorio revela una sofisticada estrategia política de aparentar una mentalidad reformista mientras, en realidad, se expandían drásticamente las deportaciones y detenciones.[27][10] La administración alcanzó un récord de deportaciones de casi 360.000 en el año fiscal 2008, el último año de la administración Bush, y esta tasa continuó y, en algunos aspectos, aumentó durante el mandato de Obama.[27] La justificación pública de la administración para las altas deportaciones cambió el enfoque del marco antiterrorista de la administración Bush a una lógica centrada en los delincuentes, argumentando que las deportaciones debían dirigirse a los inmigrantes con condenas penales en lugar de a los infractores comunes de su estatus.[27][30] Para 2016, la administración Obama informó que más del 90 por ciento de las expulsiones internas involucraban a personas condenadas por delitos graves, un cambio drástico con respecto a la tasa de condenas penales de años anteriores.[27]

La administración Obama implementó esta estrategia de aplicación de la ley centrada en los delincuentes a través de memorandos de discreción fiscal que ordenaban al ICE priorizar la expulsión de inmigrantes condenados por delitos graves sobre los inmigrantes indocumentados comunes que viven y trabajan pacíficamente en Estados Unidos.[27][30] El memorando de discreción fiscal de noviembre de 2014 estableció tres niveles de prioridad: la Prioridad 1 incluía amenazas a la seguridad nacional, inmigrantes detenidos inmediatamente en la frontera, miembros de pandillas e inmigrantes condenados por delitos graves o delitos graves agravados; la Prioridad 2 incluía inmigrantes condenados por tres o más delitos menores o un delito menor grave, y personas que habían ingresado ilegalmente recientemente; la Prioridad 3 incluía inmigrantes sujetos a órdenes de expulsión definitivas emitidas después del 1 de enero de 2014.[27][30] La administración Obama dio a conocer estas prioridades como evidencia de moderación y preocupación humanitaria, argumentando que la administración se estaba centrando en "los peores de los peores" en lugar de los inmigrantes comunes.[27]

Sin embargo, esta estrategia de discreción procesal cumplió importantes funciones políticas para la administración Obama. Primero, permitió a la administración lograr un número récord de deportaciones, que podían publicitarse entre los votantes blancos de clase trabajadora y aquellos preocupados por el control fronterizo, mientras afirmaba que las deportaciones se dirigían solo a criminales peligrosos, lo que permitió a la administración mantener el apoyo entre las comunidades de defensa de los inmigrantes y los electorados latinos.[27][10] Segundo, el enfoque centrado en los criminales hizo que las deportaciones fueran menos visibles y políticamente controvertidas porque los inmigrantes a los que se dirigían tenían condenas penales; argumentar en contra de deportar a un no ciudadano condenado por narcotráfico o agresión era políticamente difícil, mientras que oponerse a la deportación de un padre de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes penales es más comprensible.[27] Tercero, el marco de discreción procesal preservó la capacidad de la administración para cambiar las prioridades de aplicación de la ley si las condiciones políticas cambiaban, lo que permitió flexibilidad sin cambiar el estatuto o reglamento subyacente.

Sin embargo, esta estrategia de discreción procesal tuvo profundos efectos en las comunidades inmigrantes. Al crear una gran reserva de inmigrantes indocumentados sujetos a deportación, la administración Obama perpetuó la infraestructura que permitía la deportación rápida cada vez que cambiaba la voluntad política. La administración también expandió el programa Comunidades Seguras a nivel nacional (después de intentar inicialmente limitarlo), asegurando que las interacciones de las fuerzas del orden estatales y locales continuaran canalizándose a ICE para las consecuencias migratorias.[26]

El historial de la administración Obama en otros mecanismos de control revela una complejidad adicional. La administración utilizó ampliamente la detención, con una población diaria detenida que alcanzó un promedio de 50 000 para el año fiscal 2019, significativamente superior al nivel del año fiscal 2000 de 19 000.[26] La administración también continuó y amplió las operaciones de control fronterizo que se habían desarrollado a lo largo de las décadas de 1990 y 2000.

La Operación Gatekeeper, iniciada en 1994 en el sector de San Diego y que empleaba iluminación de estadios, sensores terrestres y cámaras infrarrojas para disuadir las entradas ilegales, se replicó en otros sectores fronterizos bajo administraciones tanto republicanas como demócratas.[35]

La administración Trump (2017-2021) representó una ruptura decisiva en la retórica y algunas estrategias de aplicación de la ley, al tiempo que perpetuó la infraestructura subyacente creada por administraciones anteriores.[8][38][39][57] Trump hizo campaña con una política de mano dura en materia de inmigración, prometió deportar a "millones" de inmigrantes indocumentados y se comprometió a construir un muro masivo en la frontera sur financiado por México (una promesa con la que México se negó a cooperar).[57][58] La política de separación familiar de la administración Trump, implementada en 2018 bajo la política de enjuiciamiento de "tolerancia cero" del fiscal general Jeff Sessions, separó a aproximadamente 5500 niños de sus padres, un mecanismo de aplicación de la ley deliberadamente cruel diseñado para disuadir la solicitud de asilo y el cruce ilegal de la frontera mediante la inflicción de trauma familiar.[39]

Trump también firmó la Orden Ejecutiva 13769, comúnmente conocida como la "prohibición de viajar", que prohíbe la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y suspende la admisión de refugiados en Estados Unidos.

Programa.[38][41] La Orden Ejecutiva se justificó como una medida antiterrorista, pero en la práctica sirvió como una medida discriminatoria contra la inmigración musulmana, y las propias declaraciones de Trump durante su campaña pidiendo explícitamente un "cierre total y completo de la inmigración musulmana" hicieron evidente la intención de la orden.[38][41]

La administración Trump también intentó poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que había protegido de la deportación a los jóvenes inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos siendo niños.

[40][37] Trump rescindió el memorando DACA de 2012 en septiembre de 2017, aunque los tribunales federales bloquearon la rescisión y los litigios posteriores preservaron el programa.[40]

Sin embargo, el historial real de deportaciones de la administración Trump, si bien significativo, no alcanzó los niveles drásticos que prometía su retórica. La administración sí incrementó drásticamente las deportaciones internas, particularmente mediante la ampliación de la autoridad del ICE para realizar arrestos en la calle, pero no se logró el objetivo declarado de Trump de deportar a un millón de personas anualmente. Esto se debió en parte a limitaciones operativas —los tribunales de inmigración ya estaban gravemente saturados, lo que imposibilitaba el procesamiento rápido de las deportaciones—, pero también a que gran parte de la agenda de Trump requería la aprobación del Congreso, la cual no se concretó en algunas prioridades clave.

La administración Trump gastó aproximadamente 15 mil millones de dólares en barreras fronterizas durante sus cuatro años en el cargo, cumpliendo así la promesa explícita de campaña de construir un muro en la frontera sur.[56] La administración también aumentó drásticamente la capacidad de detención, con planes para campos de detención masivos para albergar a inmigrantes en espera de deportación.[57] Las prioridades de aplicación de la ley de la administración se expandieron más allá de las prioridades centradas en el crimen de la administración Obama para dirigirse prácticamente a todos los no ciudadanos que pudieran ser deportados, y la administración indicó que cualquier persona considerada deportable o inadmisible era una prioridad para la expulsión.[30]

La administración Biden (2021-2025) heredó la enorme infraestructura de aplicación de la ley creada durante las tres décadas anteriores e inicialmente intentó reorientar las prioridades de aplicación de la ley hacia los no ciudadanos más peligrosos.[11][30] [47] El 20 de enero de 2021, la administración Biden emitió órdenes ejecutivas que revocaban algunas políticas de Trump, incluyendo el fin de la prohibición de viajar, la reafirmación de las protecciones de DACA y la terminación de la declaración de emergencia nacional de Trump que había desviado fondos militares a la construcción del muro fronterizo.[44][47] La administración respaldó la Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos de 2021, que habría proporcionado vías a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que ya se encontraban en Estados Unidos.[44][47]

Sin embargo, la administración Biden enfrentó presiones extraordinarias en materia de inmigración que limitaron su capacidad para implementar una agenda puramente reformista. Un número récord de solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados llegaron a la frontera sur, y los encuentros en la frontera alcanzaron niveles sin precedentes.[11][47] La retórica de la administración sobre la bienvenida a los inmigrantes entraba en conflicto con la realidad de que la frontera sur estaba experimentando una presión migratoria históricamente alta, lo que generó vulnerabilidad política ante los ataques republicanos que acusaban a la administración de presidir una "frontera abierta".[11][47]

La administración Biden respondió a la creciente presión política con medidas cada vez más restrictivas que socavaron su propia retórica reformista. En junio de 2023, el presidente Biden emitió una proclamación de emergencia y una norma que prohibía a la mayoría de los migrantes que llegaban sin autorización solicitar asilo, limitando efectivamente las solicitudes de asilo a aproximadamente 1450 citas de la CBP One por día.[11] Al año siguiente, Biden anunció restricciones adicionales al asilo y deportaciones aceleradas a través de los procedimientos de deportación acelerada del Título 8, intentando competir con Trump en cuanto a credenciales de aplicación de la ley, al tiempo que mantenía una negación plausible de animosidad antiinmigrante.[11][47]

El historial de deportaciones de la administración Biden revela el consenso bipartidista subyacente a la infraestructura de aplicación de la ley. La administración deportó aproximadamente a 591.000 personas en sus primeros tres años, con la vasta

La mayoría de las deportaciones se producen a través de retornos, donde los migrantes reconocen la entrada ilegal pero evitan las órdenes de expulsión formales.[11] Combinado con las expulsiones del Título 42 durante la orden de emergencia por la pandemia (que se produjeron principalmente bajo Biden a pesar de que Trump inició la orden por la pandemia), el total de repatriaciones de la administración Biden superó los 4,4 millones, superando cualquier mandato presidencial desde el segundo mandato de la administración de George W. Bush (que logró un total de 5 millones de repatriaciones).[11]

Las elecciones de 2024 pusieron de manifiesto las consecuencias políticas de la ambivalencia del Partido Demócrata en materia de inmigración y su incapacidad para controlar la frontera sur lo suficiente como para mantener la credibilidad política.

La inmigración se convirtió en el segundo tema más importante para los votantes a nivel nacional (frente al 3% en 2020), con un 40% de los votantes a nivel nacional apoyando la deportación de inmigrantes indocumentados (frente al 30% en 2020).[53] En estados indecisos alejados de la frontera sur, como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, el 80% de los votantes apoyó la deportación de inmigrantes indocumentados.[53] Trump ganó decisivamente las elecciones presidenciales de 2024, y la aplicación de las leyes de inmigración se identificó como un tema clave que contribuyó a su victoria.[53]

El segundo mandato de la administración Trump (2025-presente) representa una aceleración drástica de la aplicación de la ley en formas posibilitadas por la infraestructura construida durante las tres décadas anteriores.[8][60] Las deportaciones posteriores a arrestos de ICE en el interior de los Estados Unidos aumentaron 4,6 veces entre finales de 2024 y mediados de 2025, y ICE cuadruplicó el número de arrestos que resultaron en detención.[8] ICE amplió drásticamente los arrestos en la calle, arrojando a muchísimas más personas sin condenas penales, y la administración eliminó la posibilidad de liberación antes de las decisiones finales de deportación, y la detención condujo cada vez más a la expulsión.[8][60]

## Formación de coaliciones, consecuencias electorales y el patrón de instrumentalización política.

A lo largo de todo el periodo 1926-2026, la política migratoria ha servido sistemáticamente como herramienta para la formación de coaliciones partidistas y la obtención de ventajas electorales, aunque con distintos grupos objetivo en cada época. Durante la época restrictiva (1926-1965), los republicanos consolidaron el apoyo de los sindicatos preocupados por la competencia salarial, los sectores nativistas temerosos del desplazamiento cultural y los intereses empresariales que buscaban controlar la oferta laboral.

Durante esta época, los demócratas, aunque a veces se oponían a la discriminación racial más flagrante, aceptaron en gran medida el consenso restrictivo —con importantes excepciones como Emanuel Celler— porque el ala sureña del partido seguía comprometida con la supremacía blanca en un sentido amplio.

Durante la era de la liberalización (1965-1996), el Partido Demócrata se posicionó deliberadamente como el partido de los derechos civiles y defensor de las comunidades inmigrantes, incluso mientras ocultaba las verdaderas implicaciones demográficas de la Ley Hart-Cellar para obtener réditos electorales y políticos. Al priorizar la reunificación familiar en la admisión de inmigrantes, los demócratas se aseguraron de que los patrones migratorios se inclinaron gradualmente hacia nacionalidades con familiares ya en Estados Unidos: cada vez más inmigrantes latinoamericanos y asiáticos que eventualmente se convertirían en votantes demócratas. Las falsas garantías explícitas del partido de que la Ley Hart-Cellar no aumentaría significativamente la inmigración sugieren que la dirección del partido o bien malinterpretó profundamente su propia legislación o bien la tergiversó deliberadamente para mantener su viabilidad política mientras buscaba un cambio demográfico a largo plazo.

Durante la era de la liberalización, los republicanos inicialmente tuvieron dificultades para responder de manera coherente a los patrones de inmigración posteriores a 1965 y al cambio demográfico. La coalición histórica del partido, que combinaba intereses empresariales y sindicatos, se fracturó a medida que se intensificaban las preocupaciones de los trabajadores sobre la competencia de los indocumentados, mientras que los intereses empresariales exigían cada vez más acceso a la mano de obra inmigrante, tanto documentada como indocumentada. Para las décadas de 1980 y 1990, los republicanos habían desarrollado una nueva estrategia de coalición en torno al restrictivismo migratorio que atraía a los votantes blancos de clase trabajadora, a los votantes blancos del sur y a los sectores culturalmente conservadores preocupados por

Cambio demográfico y asimilación cultural. Esta estrategia evitó intencionadamente el lenguaje racial explícito de la época anterior a 1965, y en su lugar, enmarcó la oposición a la inmigración indocumentada en términos de estado de derecho y carga fiscal, lo que proporcionó una justificación económica y legal para políticas con una profunda selectividad étnica.

La era centrada en la aplicación de la ley (1996-2026) ha revelado un profundo consenso bipartidista sobre la conveniencia de una infraestructura masiva para el control de la inmigración, a pesar de las discrepancias entre los partidos en cuanto a las prioridades y la retórica en materia de enjuiciamiento. Tanto republicanos como demócratas han apoyado un aumento drástico en los presupuestos de la Patrulla Fronteriza, la capacidad de detención y la autoridad para deportar. Ambos partidos han respaldado la construcción de barreras fronterizas. Ambos partidos han ampliado el programa Comunidades Seguras y mecanismos similares que canalizan las interacciones de las fuerzas del orden estatales y locales hacia la aplicación de la ley en materia de inmigración. Ambos partidos han desplegado la infraestructura de control migratorio de forma selectiva, de manera que beneficie a sus respectivos electorados.

La historia laboral de este período revela cómo se ha utilizado la inmigración para gestionar la política de clases. La AFL-CIO, tras la fusión de 1955, liberalizó su postura sobre la inmigración legal, al tiempo que se volvía cada vez más hostil hacia la inmigración indocumentada.<sup>[13][16]</sup> El posicionamiento del partido como defensor de las comunidades inmigrantes competía con las demandas de los sindicatos obreros de protección contra la competencia indocumentada. El Partido Demócrata intentó sortear esta tensión apoyando legislación centrada en la aplicación de la ley (como la IIRIRA y las posteriores ampliaciones de su aplicación) mientras defendía retóricamente a las comunidades inmigrantes y, finalmente, apoyaba vías hacia la ciudadanía. Esta estrategia permitió al partido mantener el apoyo de la clase trabajadora entre los miembros de los sindicatos, al tiempo que fortalecía su base electoral entre los crecientes electorados latinos e inmigrantes, al menos hasta que la inmigración se convirtió en un tema tan relevante que las preocupaciones de ambos sectores no pudieron ser satisfechas simultáneamente.

Los datos electorales revelan las consecuencias de este patrón centenario de instrumentalización de la política migratoria. La Ley Hart-Cellar incrementó drásticamente la inmigración latinoamericana y asiática, y estos grupos han apoyado sistemáticamente a los demócratas en mayor proporción que la población general.<sup>[22][24][45]</sup> Sin embargo, el drástico aumento de la inmigración indocumentada —en parte consecuencia de la eliminación de las cuotas del hemisferio occidental por parte de la Ley Hart-Cellar— generó inquietudes sobre la competencia entre los sectores de clase trabajadora que históricamente habían apoyado a los demócratas. Para las elecciones de 2024, se observaron importantes deserciones: Trump ganó 13 puntos a nivel nacional entre los votantes hispanos en comparación con 2020 (perdiendo por solo 3 puntos en lugar de 28), y recibió un 30 por ciento de apoyo entre los inmigrantes negros varones en comparación con solo un 11 por ciento entre los hombres negros nacidos en el país.<sup>[21][24][45]</sup>

Estos cambios electorales revelan las consecuencias políticas a largo plazo de cómo el Partido Demócrata utilizó la política migratoria para formar coaliciones, sin abordar adecuadamente las preocupaciones de la clase trabajadora sobre la competencia salarial. El Partido Republicano, por el contrario, ha mantenido un apoyo constante de la clase trabajadora en materia de inmigración, incluso cuando los intereses empresariales continuaron exigiendo acceso a mano de obra inmigrante. La capacidad republicana para mantener esta coalición refleja la adopción explícita por parte del partido de los intereses de la clase trabajadora en materia de inmigración, particularmente después de que la elección de Trump en 2016 demostrara que una política migratoria restrictiva de línea dura podía movilizar apoyo electoral, incluso a costa de alienar a los intereses empresariales que históricamente habían apoyado al partido.

La característica más llamativa de todo el período 1926-2026 es cómo la infraestructura de control migratorio, una vez construida, persiste a través de las administraciones de ambos partidos y se vuelve progresivamente más intensiva y sofisticada. La Patrulla Fronteriza, creada en 1924, se expandió de 450 agentes a 15 000 agentes para 2007, manteniéndose entre 20 000 y 25 000 agentes en los años siguientes.<sup>[32][56]</sup> El mandato de camas de detención generó presión política para mantener altas poblaciones detenidas independientemente de las prioridades de control. Las Comunidades Seguras

El programa, aunque fue suspendido brevemente por la administración Obama, fue reiniciado bajo Trump y continúa bajo Biden.[26]  
[30] Cada administración que promete revertir los enfoques de aplicación de la administración anterior en cambio perpetúa o expande la infraestructura subyacente.

Este patrón sugiere que la aplicación de la ley de inmigración se ha institucionalizado de maneras que trascienden la política partidista, creando lo que podría denominarse un "estado de deportación bipartidista".[56][57] El enorme aparato burocrático creado para hacer cumplir la ley de inmigración requiere justificación presupuestaria a través de la actividad continua de aplicación de la ley; las camas de detención deben estar llenas; los agentes de la Patrulla Fronteriza deben estar desplegados; la infraestructura de deportación debe procesar los casos. Una vez que este aparato existe, crea apoyo popular entre las agencias de aplicación de la ley cuyos presupuestos dependen de la aplicación de la ley de inmigración, los contratistas de defensa que se benefician de la tecnología fronteriza, las corporaciones de detención que operan centros de detención de inmigrantes y las comunidades donde las oficinas de la Patrulla Fronteriza y los centros de detención dan empleo.[56]

Sin embargo, dentro de este consenso bipartidista sobre la aplicación de la ley, los partidos la han aplicado de forma selectiva, reflejando así sus objetivos políticos. Las prioridades de la administración Obama, centradas en la delincuencia, le permitieron mantener el apoyo del electorado latino al tiempo que lograba un número récord de deportaciones. La drástica expansión de los arrestos y detenciones callejeras durante la administración Trump le permitió atraer a sectores antiinmigración preocupados por el cambio cultural y la inmigración indocumentada. El intento de la administración Biden de mantener la infraestructura de aplicación de la ley, al tiempo que apoyaba la reforma, reflejó la presión política de ambas partes: los votantes de clase trabajadora que exigían la aplicación de la ley y los votantes latinos que exigían vías hacia la ciudadanía.

**Conclusión:** El patrón que se ha mantenido durante un siglo y sus implicaciones contemporáneas.

El periodo de 100 años comprendido entre 1926 y 2026 demuestra que los partidos políticos estadounidenses han utilizado sistemáticamente las políticas y la aplicación de la ley de inmigración como arma para consolidar y expandir su poder político. Durante la era restrictiva (1926-1965), los republicanos construyeron una infraestructura de control migratorio diseñada explícitamente para mantener la preferencia étnica en la inmigración, al tiempo que consolidaban el apoyo de los sindicatos y los sectores nativistas. Durante la era de liberalización (1965-1996), los demócratas modificaron deliberadamente los patrones migratorios mediante la Ley Hart-Cellar para aumentar la inmigración procedente de regiones cuyas poblaciones acabarían conformando distritos electorales demócratas, al tiempo que construían una narrativa de progreso en materia de derechos civiles que enmascaraba la ingeniería demográfica que se estaba llevando a cabo. La era centrada en el control migratorio (1996-2026) ha visto a ambos partidos adoptar una infraestructura de deportación cada vez más intensiva y sofisticada, aunque la han desplegado selectivamente según sus intereses partidistas.

Este patrón centenario revela que la política migratoria no ha evolucionado según principios ideológicos coherentes ni por razones humanitarias, sino que se ha utilizado estratégicamente como herramienta para gestionar las relaciones de clase, consolidar coaliciones étnicas y electorales, y ampliar el poder gubernamental para vigilar y regular a la población. La infraestructura construida para el control migratorio —la Patrulla Fronteriza, los centros de detención, el programa Comunidades Seguras que vincula a las fuerzas del orden estatales y locales con las autoridades federales de inmigración, los marcos de discrecionalidad procesal, la tecnología de vigilancia fronteriza y los sistemas de adjudicación de visas— se ha integrado en la gobernanza estadounidense de tal manera que su reversión o limitación resulta política y burocráticamente difícil, independientemente del partido que controle el gobierno.

Las elecciones de 2024 y el momento político actual revelan los límites de la estrategia demócrata en torno a la inmigración. El partido que construyó el sistema Hart-Cellar anticipó que la inmigración de América Latina y Asia crearía una mayoría demócrata permanente. Sin embargo, la inmigración, en particular la inmigración indocumentada y la visibilidad de la frontera en el discurso político, se ha convertido en una vulnerabilidad que los candidatos demócratas luchan por defender. La incapacidad o falta de voluntad del partido para implementar medidas de cumplimiento suficientes para

El intento de satisfacer a los votantes de clase trabajadora y, al mismo tiempo, mantener el apoyo de la comunidad inmigrante, ha provocado la deserción electoral en ambos grupos. Simultáneamente, la adopción por parte del Partido Republicano de una postura intransigente en materia de restricciones a la inmigración como tema central de su identidad ha demostrado ser electoralmente exitosa para consolidar el apoyo de la clase trabajadora blanca y generar divisiones dentro de la coalición demócrata.

En 2026, Estados Unidos cuenta con una capacidad de control migratorio más intensa que nunca, un compromiso bipartidista para mantener dicho aparato a pesar de su drástica expansión y alcance, y presión política en ambos sentidos: quienes exigen menos control y quienes exigen más. La infraestructura construida a lo largo de cien años de maniobras partidistas se ha consolidado como una fuerza autónoma en la gobernanza estadounidense, lo que sugiere que el control migratorio seguirá siendo políticamente relevante y administrativamente intensivo, independientemente del partido que gobierne o de los compromisos retóricos que asuman los partidos durante las campañas electorales.

---

## Lista de referencias

[1] Ley de Inmigración de 1924 - Wikipedia, que abarca las disposiciones de la Ley Johnson-Reed, las posiciones de los arquitectos y la intención legislativa.

[2] La Ley de Inmigración Hart-Cellar de 1965 - Centro de Estudios de Inmigración, que abarca la historia legislativa de Hart-Cellar, las disposiciones de reunificación familiar y las consecuencias de la migración en cadena.

[3] Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante - Cornell Law Wex, que cubre las disposiciones de la IIRIRA y los mecanismos de aplicación.

[4] Legados contemporáneos de la Ley de Inmigración de 1924 - Duke University Press, que abarca la infraestructura de aplicación de la Ley de 1924 y su significado contemporáneo.

[5] Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 - Wikipedia, que abarca los patrones de votación y las disposiciones legislativas de Hart-Cellar.

[6] HR2202 - Ley de Control y Facilitación de la Inmigración de 1996 - Congress.gov, que abarca las disposiciones integrales de la IIRIRA.

[7] Opinión pública y votaciones del Congreso sobre la Ley de Inmigración de 1965 - Instituto de Economía Laboral, que analiza los patrones de votación del Congreso y la opinión pública sobre Hart-Cellar.

[8] Aplicación de la ley de inmigración en los primeros nueve meses de la administración Trump: datos de deportación, que abarcan la aceleración contemporánea de la aplicación de la ley en el interior del país.

[9] Encuesta de inmigrantes de KFF/New York Times de 2025 - KFF, que abarca la afiliación partidista de los votantes inmigrantes y las opiniones sobre la aplicación de la ley de inmigración.

[10] La evolución de la política y la ley de inmigración dentro del Partido Demócrata - Revista de Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de Miami, que cubre las posiciones de inmigración del Partido Demócrata desde la era de Obama hasta la de Trump.

[11] Comparación de los historiales de deportación de Biden y Trump - Migration Policy Institute, comparación de estadísticas de deportación y enfoques de aplicación de la ley.

[12] Encuesta de política migratoria de UCLA: Encuesta a votantes de California - Instituto de Política y Política Latina de UCLA, que cubre la divergencia republicana en la aplicación de la ley de inmigración.

[13] Políticas de inmigración de los sindicatos laborales estadounidenses - Wikipedia, que abarca el restrictivismo de la AFL, el liberalismo de la CIO y el posicionamiento laboral posterior a la fusión de 1955.

[14] La Ley Patriota de EE. UU.: Preservando la vida y la libertad - Departamento de Justicia, que abarca las disposiciones de aplicación de la ley de inmigración de la Ley Patriota.

[15] Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 - Wikipedia, que abarca las disposiciones de la IRCA, las sanciones a los empleadores y la legalización.

[16] Derechos de los inmigrantes: Los sindicatos hacen historia en Estados Unidos - Exposiciones de la Universidad de Maryland, que abarcan la evolución de los sindicatos laborales en materia de derechos de los inmigrantes.

[17] Ley Patriota - Wikipedia, que abarca las disposiciones de la Ley Patriota y la autoridad para hacer cumplir la ley en materia de inmigración.

[18] Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 - Una guía de recursos para latinos - Biblioteca del Congreso, que cubre la implementación y los efectos de la IRCA.

[19] Persiguiendo el "voto latino" - Asociación Histórica Estadounidense, que abarca estrategias electorales y enfoques de campaña latinos.

[20] La Estrategia del Sur: De Nixon a Trump - Culturas del Sur, que abarca el desarrollo y la aplicación de la Estrategia del Sur.

[21] Los votantes inmigrantes de Estados Unidos y las elecciones presidenciales de 2024 - Brookings Institution, que analiza la afiliación partidista de los votantes inmigrantes y los cambios electorales de 2024.

[22] Hispanos y latinoamericanos en la política - Wikipedia, que abarca los patrones de votación de los latinos y el apoyo demócrata.

[23] Estrategia del Sur - Wikipedia, que abarca la estrategia republicana del Sur y la estrategia de polarización racial.

[24] Patrones de votación en las elecciones de 2024 - Pew Research Center, que abarca los cambios demográficos y de votantes hispanos en 2024.

[25] Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 - Wikipedia, que abarca las disposiciones de la Ley McCarran-Walter y las preocupaciones de seguridad de la Guerra Fría.

[26] Dos décadas después del 11-S: Inmigración y seguridad nacional - Migration Policy Institute, que abarca la expansión de la aplicación de la ley de inmigración y los aumentos presupuestarios posteriores al 11-S.

[27] El historial de Obama sobre deportaciones - Migration Policy Institute, que abarca las prioridades de aplicación de la ley y las estadísticas de deportación de la administración Obama.

[28] Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (Ley McCarran-Walter) - Instituto de Historia de la Inmigración, que cubre el contexto y las disposiciones de la Ley McCarran-Walter.

[29] El temor a otro 11-S sigue impulsando la política de inmigración - Consejo Estadounidense de Inmigración, que cubre el cambio de política de inmigración que prioriza la seguridad después del 11-S.

[30] Comparación de las prioridades de aplicación de la ley en materia de inmigración de Obama, Trump y Biden - Grupo de trabajo sobre inmigración y aplicación de la ley, que compara los marcos de priorización de la aplicación de la ley.

[31] Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 - Congress.gov, que abarca las restricciones de asistencia social para los no ciudadanos.

[32] De la cabalgata a la alta tecnología: Control fronterizo de EE. UU. - Migration Policy Institute, que abarca la evolución del control fronterizo y la expansión del presupuesto.

[33] Proposición 187 de California de 1994 - Wikipedia, que cubre las disposiciones de la Proposición 187 y el contexto político.

[34] Legislación propuesta en el 118° Congreso - Foro Juntos, que abarca propuestas recientes de inmigración restrictivas.

[35] Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos - Wikipedia, que abarca la historia y las estrategias operativas de la Patrulla Fronteriza.

[36] 1994: Proposición 187 de California - Biblioteca del Congreso, que abarca los intentos de implementación de la Proposición 187.

[37] Legislación y política de DACA - Servicios para estudiantes indocumentados de la Universidad de California en San Diego, que abarca el programa DACA y los cambios en las políticas.

[38] Prohibición de viaje de Trump (Orden ejecutiva 13769) - EBSCO Research Starters, que cubre las disposiciones de la prohibición de viaje y la controversia.

[39] Política de separación familiar de la administración Trump - Wikipedia, que abarca la implementación y el alcance de la separación familiar.

[40] Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA): Una descripción general - Consejo Estadounidense de Inmigración, que abarca la creación de DACA, los intentos de terminación y el estado actual.

[41] Orden Ejecutiva 13769 - Wikipedia, que cubre los detalles de la orden ejecutiva de prohibición de viajes.

[42] Una mirada retrospectiva a la política de separación familiar - Consejo Estadounidense de Inmigración, que cubre el análisis de la política de separación familiar.

[43] Operación Wetback - Wikipedia, que cubre la campaña de aplicación de la ley Operación Wetback.

[44] Acciones ejecutivas del presidente Biden sobre inmigración - Centro de Estudios Migratorios, que abarca las órdenes ejecutivas iniciales de Biden sobre inmigración.

[45] Los votantes inmigrantes de Estados Unidos y las elecciones presidenciales de 2024 - Brookings Institution, que analiza los cambios en el electorado inmigrante de cara a 2024.

[46] Ataque a la democracia mediante redadas en los lugares de trabajo de inmigrantes - Cambridge University Press, que analiza las redadas de inmigración como represión laboral.

[47] Política de inmigración de la administración Biden - Wikipedia, que abarca la evolución de la política de inmigración de la administración Biden.

[48] Tendencias en los votantes elegibles de 2000 a 2024: inmigrantes trabajadores, que abarca las tendencias demográficas en la composición de los votantes elegibles.

[49] Los votantes inmigrantes de Estados Unidos y las elecciones de 2024 - Brookings Institution, que analiza los patrones de votación de los ciudadanos naturalizados.

[50] Explorando cómo los cambios en los estados indecisos impactan las elecciones presidenciales de EE. UU. - ABC News, cubriendo la dinámica de los estados indecisos y la inmigración como tema.

[51] El mito de la manipulación electoral - Brookings Institution, que abarca la competitividad electoral y el equilibrio partidista.

[52] Votantes asiáticos en los EE. UU.: Excepción de los estadounidenses de origen vietnamita - Pew Research Center, que analiza los patrones de votación de los estadounidenses de origen asiático.

[53] La inflación y las elecciones de inmigración de 2024 - Centro de Estudios de Inmigración, que cubre la inmigración como tema de las elecciones de 2024.

[54] Los republicanos del Tea Party expresan su preocupación por la inmigración - Washington Examiner, que cubre las posturas republicanas sobre inmigración.

[55] Ley de Reforma Integral de la Inmigración de 2007 - Wikipedia, que cubre el fallido intento de reforma integral de 2007.

[56] El costo de la aplicación de las leyes de inmigración y la seguridad fronteriza - Consejo Estadounidense de Inmigración, que abarca un análisis exhaustivo del presupuesto de aplicación de la ley.

[57] Trump sobre inmigración - Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, cubriendo las amenazas de inmigración de la administración Trump.

[58] Plan del presidente Bush para una reforma migratoria integral - Archivos de la Casa Blanca de George W. Bush, que cubren la propuesta de inmigración de la administración Bush.

[59] Presupuesto del programa de la Patrulla Fronteriza 1990-2024 - Statista, que cubre las tendencias presupuestarias de la Patrulla Fronteriza.

[60] Desatando el poder de nuevas maneras: Inmigración en el segundo mandato de Trump - Migration Policy Institute, que cubre la aplicación de las leyes de inmigración en el segundo mandato de Trump.